

OLEADA DE EXHUMACIONES PROVOCADA POR HIJOS ILEGÍTIMOS

Sofía quiere parte de los 24 millones que el señorito que embarazó a su madre dejó en herencia. Y como ella, otros muchos. Según los expertos, hay un «boom» de reclamaciones judiciales. La crisis levanta cadáveres

ANA MARÍA ORTIZ

Tras dejar embarazada a la humilde Candelas el señorito don Arturo se desentiende de ella y repudia a su hija. Candelas, marcada por la deshonra, tiene que abandonar el pueblo sola y en estado. Es el comienzo de la película más taquillera de la Guerra Civil —*¡Centinela, alerta!*, de Jean Grémillon y con Luis Buñuel tras el guión—, y un retrato verídico de un trance habitual en la época: las relaciones entre jóvenes potentados y sus criadas, encuentros furtivos de los que nacieron miles de hijos ilegítimos nunca reconocidos por sus acaudalados padres.

Hoy muchos de esos niños repudiados están pidiendo a la justicia que abran las tumbas de sus progenitores, cotejen los ADN y les den los apellidos y las millonarias herencias que les corresponden. A los medios de comunicación han llegado los casos en los que hay envueltos apellidos sonados. Como la exhumación del cadáver de Ernesto Koplowitz, el padre de Alicia y Esther Koplowitz, tras la reclamación de Carlos Iglesias, presunto hijo ilegítimo. O la apertura de la tumba del IV marqués de Larios, de quien dice ser hijo José Collado López, más conocido como *Pepe el Trompetista*. O el caso de la actriz Fiorella Faltoyano, que tras las pertinentes pruebas genéticas al difunto se ha resuelto hace 10 días con sentencia a su favor. Como reclamaba, es hija de Pardo Arias, ex alcalde de Pantón (Lugo).

Pero al margen de estos procesos mediáticos, hay decenas de españoles anónimos, hijos o nietos ilegítimos, embarcados en la misma batalla legal. Las exhumaciones para determinar paternidades crecen. En juego, colosales patrimonios.

—¿Por qué reclama ahora, Sofía?

—Porque nací en una generación dominada por el miedo al poder. «Cómo voy a enfrentarme a quien lo tiene todo», pensaba. Pero ahora las cosas han cambiado, mis hijos tienen dificultades económicas y piensas: «¡Qué injusto que él lo tenga todo y nosotros nada!».

La mujer que habla, Sofía Reguera, vecina de El Coronil (Sevilla), nació el 12 de mayo de 1949 fruto de la relación, asegura, de un poderoso terrateniente de la zona con su madre, la sirvienta, quien fue apartada de la finca en cuanto comenzó a engordarle la tripa. El presunto padre —«un empresario agrícola muy famoso en Andalucía» cuyo nombre se guardan para no perjudicar el caso— volvió a casarse y tuvo un solo hijo, quien, a su muerte, en 1970, lo heredó todo. Según el informe del investigador que Sofía y sus tres hijos contrataron para

hace seis años cuando su madre, Agustina, prácticamente en el lecho de muerte, lo llamó a él y a sus cuatro hermanos y les reveló el secreto familiar: «Soy hija de un millonario terrateniente cordobés. Mi madre era su sirvienta y, al quedarse embarazada de él, en 1924, la obligaron a abandonar la hacienda. Él estaba casado y entonces el adulterio era delito. Ahora que sabéis la verdad, ¡reclamad lo vuestro!».

Antonio Gómez ya tiene el permiso judicial para exhumar los restos de su abuelo y someterlos a la prueba de ADN. Fallecido en 1981, el latifundista se casó dos veces pero no tuvo descendencia y son su segunda esposa, quien aún vive, y sus sobrinos los que disfrutaban del impresionante patrimonio que dejó. «Tengo entendido que si ganamos [él y sus cuatro hermanos] a nosotros nos correspondería el 81% y a ella [la viuda] el 19%», dice. «Yo sólo quiero lo que es mío, reclamo lo mío, de lo que se están aprovechando otros. La viuda y los sobrinos están viviendo como reyes y nosotros en un piso de protección oficial», clama.

Tras la confesión de la madre, Antonio puso el tema en manos del abogado sevillano Fernando Osuna, al que llegó a través de un vecino con una historia gemela a la suya. Éste consiguió seis millones de euros tras el litigio y ahora vive tan ricamente en Sevilla.

No hay datos sobre el número de exhumaciones que se realizan cada año en España, y menos aún sobre cuántas de ellas son ordenadas tras la demanda de hijos o nietos ilegítimos. Pero basta con echar un vistazo a la cartera de clientes de Fernando Osuna para palpar la envergadura del fenómeno. El abogado de familia lleva 31 años ejerciendo y hará una década que aceptó la primera reclamación de

una biopsia guardada en el hospital. Cualquier objeto del que se pueda extraer ADN.

De todos los expedientes que Osuna ha llevado, el 80% se concentran en los últimos cinco años, otra evidencia del aumento de casos. «La crisis apremia y la gente se mueve mucho para conseguir lo que es suyo», dice. «Y al margen de la crisis, hasta ahora mucha gente no lo pedía por ignorancia o miedo y al ver en los medios que alguien con una historia similar a la suya lo consigue, se animan».

Entre sus representados está Fernando Artacho, 79 años, quien sostiene que su abuela es hija ilegítima del XV Duque de Alba. Y ha defendido también a Rafael Rebollar, un caso muy conocido por ser él un modesto jubilado de Écija (Sevilla) y reclamar una herencia de 10 millones a cuenta de la misma historia: su madre, Ana, era la hija de la costurera que trabajaba para los señores de la casa. Su padre, Rafael, el benjamín de los potentados. Demostrada ya la paternidad, el abogado gestiona ahora qué porcentaje del patrimonio le toca al jubilado.

Osuna tiene clientes en Argentina, México, Cuba, Malta... «Españoles que han emigrado pero reclaman propiedades de abuelos o bisabuelos aquí», dice. Y sólo ha perdido un par de casos. Ha sido precisamente a través de la publicación de sus éxitos en la prensa o por el boca a boca como han llegado a él los mencionados Sofía y Antonio y también Esteban y Amparo.

—Esteban, ¿y cuál es su historia?

—Me llamo Esteban Marchena y nací el 1 de febrero de 1955 en Los Molares (Sevilla). Mi madre, Encarnación, quedó huérfana de padre y madre a los 14 años y se puso a trabajar en la casa de unos señoritos de la zona. A los 18 años quedó embarazada del hijo de estos señores

exhumación del cadáver de mi padre, pero cuando los forenses fueron a practicarla mis hermanastros habían incinerado sus restos y los de mis abuelos. Ahora estamos esperando a que se autorice la comparación de ADN con el de mis hermanastros, vivos todos.

—¿Y por qué quiere ahora que se reconozca su filiación?

—Primero porque necesito saber mi identidad, quién soy... Y porque no es justo que ellos hayan tenido una vida de reyes y un hijo de su padre, como soy yo, haya malvivido. Tienen fincas y dinero, hablamos de unos dos millones de euros.

MUCHAS HECTÁREAS DE OLIVOS

«Como le digo a mis alumnos, lo que hay son muchas hectáreas de olivos de por medio. Después de 20 o 30 años no se organiza un proceso de este tipo por el apellido sino, lógicamente, por la herencia». Habla el profesor José Antonio Lorente, del departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, donde han realizado 32 exhumaciones para determinar paternidades desde 1998, 29 de las cuales dieron positivo. «Un juez no ordena una exhumación así por así, cuando lo hace es porque tiene datos de que efectivamente hubo relación entre el señor y la señora y de que nació un hijo», dice para explicar el alto porcentaje de inclusiones.

También en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, referente mundial, los positivos son apabullante mayoría. «Hace 10 años casi no hacíamos ninguna prueba de paternidad cadavérica y ahora tenemos unas 40 al año», dice Victoria Lareu, la responsable de su servicio genético forense. «Ha habido un boom en los últimos 10 años pero sobre todo en los cinco pasados». La experta achaca la eclosión de demandas a los avances que han permitido analizar ADN parcialmente dañado y a la popularización de la técnica: «La gente comienza a saber que es posible y dice: “¿Por qué no lo voy a hacer si sé que mi padre, que nunca me quiso reconocer, está enterrado aquí?”».

—Amparo, ¿cómo supiste quién era realmente tu abuelo paterno?

—Fue hace cuatro o cinco años cuando mis padres ya habían fallecido. Una vecina del pueblo [Paradela, en Lugo] me dijo que mi padre y su hermana no eran hijos del mismo hombre. Así descubrí que mi padre, Nemesio, era realmente hijo de Benito Torres Bouzas, un vecino que en 1925 emigró a Argentina. Desde allí escribió a mi abuela pidiéndole que se fuera con él para casarse y reconocer al niño, pero ella no quiso. Benito murió en Argentina en 1954, está enterrado allí. La Audiencia de Pontevedra nos ha negado la posibilidad de hacer una prueba de ADN, así que vamos a recurrir al Supremo.

—En juego hay 62 fincas que dejó en Galicia y que se han valorado en al menos 10 millones de euros.

—No estoy enterada de lo que hay porque no me mueve el interés económico. Si viene bien, pero no lo necesito y mis hermanas [Dolores y Ana] tampoco. Sólo quiero que se reconozca la identidad de mi padre, algo que todo el pueblo sabía y han esperado a que muera mi tía, mi madre y todos para decirme. Ya que han callado tanto tiempo podían haber callado el resto.



40 AL AÑO. Exhumación de un armador pontevedrés, en 2011. Hace 10 años, en Galicia apenas se hacían desenterramientos por paternidad. Hoy, son 40 al año. / GONZALO NUÑEZ

calibrar el patrimonio, están en juego propiedades por valor de, al menos, 24 millones de euros.

—Antonio, ¿y a cuánto asciende la herencia que reclama usted?

—Yo calculo que a unos 50 millones de euros como mínimo. Tiene una fortuna inmensa, inmensa...

Antonio Gómez, de 62 años, vecino de Rubí (Barcelona), lo supo

este tipo. Desde entonces ha llevado entre 70 y 80 casos, de los que, calcula, entre un 20% y un 30% acaban en exhumaciones. «A veces se llega a un acuerdo o se hacen las pruebas con los familiares vivos. Los jueces son bastante reacios a exhumar y sólo lo piden si no hay otra salida». Vale un cepillo de dientes del finado, un peine o

y al ver mis abuelos que le crecía la barriga la echaron a la calle. Pasó un calvario porque no tenía familia que le ayudara. Cuando yo cumplí ocho años me metió en un hospicio y ella se casó con otro hombre. Me he pasado toda la vida solo. En 2008 puse una demanda contra mi padre y mis hermanastros, sus hijos legítimos. El juez ordenó la

UNA HERENCIA DE 10 MILLONES. Hace cinco años, Amparo Domínguez supo que su padre era hijo de un rico emigrado a Argentina, quien dejó valiosas propiedades en Galicia. «No quiero dinero», asegura. / BENITO PAJARES



DOS MILLONES. Esteban Marchena sostiene las imágenes de la tumba de quien considera que es su abuelo, un latifundista sevillano. Tras iniciar el proceso, la familia legítima vació el nicho e incineró el cadáver. / PEP VICENS



50 MILLONES. Antonio Gómez sostiene la foto de quien asegura que es su abuelo, un terrateniente cordobés. Su madre le reveló a él y a sus hermanos la verdad antes de morir: «¡Reclamad lo vuestro!» / ANTONIO MORENO



24 MILLONES. Sofía Reguero, de 61 años, asegura ser hija de un latifundista sevillano. Tiene tres hijos que pasan apuros económicos por la crisis y a los que ayudaría si consigue la millonaria herencia. / JESÚS MORÓN